



## LÍMITES

«Un gobierno que se saltara la ley, accediendo a las exigencias abertzales, se convertiría en un apéndice de ETA»

**M**AITE Pagazaurtundúa, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, ha sido bastante exacta al definir los términos del chantaje que la izquierda abertzale pretende imponer a la sociedad y al Estado, y las consecuencias que acarrearía ceder al mismo. El gobierno que lo hiciera se saltaría la ley, y un gobierno que se salta la ley, como muy bien dice Maite Pagazaurtundúa citando a Benedicto XVI, se convierte en una banda de forajidos. Es evidente, por otra parte, que el Papa se refería al nazismo en su discurso ante el parlamento alemán, y también que el partido nacionalsocialista era ya una siniestra organización criminal, cuyos propósitos genocidas nunca había ocultado, antes de hacerse con el gobierno de Alemania. En tal sentido, se parecía a lo que ha sido y es ETA y no a los gobiernos del Estado o de las comunidades autónomas en la historia de nuestro actual sistema político. No por ello vamos a pecar de ingenuos: en algunos de estos gobiernos ha habido forajidos y sinvergüenzas, pero esa innegable condición de unos cuantos gobernantes no se ha trasladado a los gobiernos en su conjunto. Podemos incluso tener la convicción moral de que más de uno de los gober-

nantes que delinquieron evadió la acción de la justicia, pero no por ello estamos autorizados a calificar de delincuentes, en su totalidad, a tal o cual gobierno. Existe, por otra parte, una malsana y muy extendida propensión a ver delitos en lo que no son sino equivocaciones o errores, a menudo garrafales, pero no delictivos. En democracia, éstos se castigan en las urnas, no en los tribunales.

¿Dónde está el límite entre la equivocación y el delito? En la complicidad con el crimen. El mariscal Hindenburg se convirtió en un delincuente cuando llamó a Hitler para ofrecerle la cancillería del Reich. Más aún, una gran parte de la sociedad alemana eligió el delito al votar por los nacionalsocialistas, cuyos designios criminales eran de sobra conocidos (una vez en el gobierno, Hitler y sus secuaces dejaron muy claro que no iban a permitir que la complicidad de sus electores se limitase al voto e hicieron todo lo posible por transformarlos en asesinos).

Por eso, la advertencia de Maite Pagazaurtundúa al Gobierno —al actual y al que venga— es justa y oportuna. Acceder a las exigencias de la izquierda abertzale, que ni se toma la molestia de disimular su condición de mensajero de ETA, convertiría al gobierno que lo hiciera en cómplice de la banda y, a corto plazo, en una prótesis de la misma. Las decisiones de Hindenburg y de los electores alemanes que votaron al nazismo no fueron una equivocación. Fueron delitos conscientes. Todos ellos, el mariscal y los electores, eligieron sacrificar a una buena parte de sus compatriotas y a millones de gentes que no lo eran en aras de su megalomanía colectiva.

A partir de ese momento, su historias personales y su historia nacional se fundieron con la del partido nazi. El gobierno actual lleva dos legislaturas acumulando errores garrafales en la lucha contra el terrorismo abertzale. A las urnas corresponde castigarlo. Pero, si éste o cualquier otro gobierno traspasara el límite que ha señalado Maite Pagazaurtundúa, nos encontraríamos en una situación a la que no sobreviviría nuestra democracia.